



INFORME DE LA COMISIÓN POLITICA

I.-Coyuntura geopolítica. La Guerra de Ucrania sigue marcando la situación de crisis de un Orden Internacional que está en permanente transición, como consecuencia de la permanente extensión de la OTAN hacia el este y también por una abierta pugna por los recursos en el mundo.

Al analizar la situación de la Guerra en Ucrania hay que partir de entender las causas del conflicto, que son diversas en la medida que suponen la coincidencia de varios factores:

La Directiva de Seguridad Nacional de EEUU plantea como objetivo central buscar la confrontación con Rusia y China para frenar su avance en todos los campos de las relaciones internacionales.

Pasado un año de Guerra, los errores tácticos de Rusia junto a la tremenda implicación de occidente en la ayuda militar a Ucrania han producido una situación de estancamiento del conflicto bélico, centrado hoy en objetivos tácticos y psicológicos que no permiten ver una salida militar al conflicto.

Se abre así la posibilidad de que se imponga una salida diplomática negociada que en estos momentos solamente puede liderar el Plan de Paz de China y las propuestas del presidente de Brasil Lula da Silva empeñado en la construcción de una amplia alianza internacional o G20 por la paz en Ucrania, considerando que la renuncia de Europa a mantener la más mínima autonomía estratégica de los Estados Unidos la han hecho incapaz de liderar o impulsar ningún proceso de paz. EEUU ha conseguido sus objetivos en Europa donde la OTAN se ha ampliado y fortalecido militar y socialmente, consiguiendo una auténtica refundación tras el mandato de Trump en el que parecía que Estados Unidos podía incluso prescindir de esta organización militar, y generándose una nueva dependencia energética de Europa respecto a Estados Unidos que no existía antes de la guerra.

La perpetuación de una guerra de desgaste en Ucrania y la consolidación de una situación de conflicto en el mar de la China y el estrecho de Taiwán, tendrían consecuencias sumamente negativas en materia política, económica y energética, pero sobre todo geoestratégica porque confirmaría un escenario de nueva guerra fría, lo que haría imposible avanzar en la reconfiguración de la política internacional basada en la multilateralidad y la paz entre los pueblos que defienden tanto China como los países de América Latina.

Los EEUU no han conseguido ese mismo éxito en el resto del mundo, donde Rusia y sobre todo China han aumentado sus relaciones y el dólar esta perdiendo el papel de referente principal en las transacciones económicas y comerciales, lo que lleva al capitalismo a una situación de crisis permanente. La UE está abocada a un papel secundario como no sea capaz de construir una posición de autonomía estratégica lo que implica abandonar su condición de subalterna al servicio de los centros de poder económicos y políticos de los EEUU.

América Latina y el Caribe tienen una mayoría de gobiernos progresistas convencidos de sustraerse de cualquier política de supeditación a los EEUU, interesados en incrementar las relaciones comerciales y económicas con China. La CELAC puede convertirse por primera vez en un actor importante e independiente en el concierto Internacional, lo que añade más importancia a la futura Cumbre CELAC/UE en la que América Latina y el Caribe pueden plantear unas relaciones de igual a igual con el resto de potencias del mundo, un importante paso hacia un nuevo Orden Multipolar. En su reciente visita a España el presidente de Colombia Gustavo Petro ha insistido en que esta cumbre bilateral puede abrir una nueva época no solamente de las relaciones entre los dos continentes sino también dar paso a una nueva alianza para dar soluciones eficaces a los grandes problemas de la humanidad. Pero también ha advertido que si por el contrario la cumbre se realiza sin voluntad de discutir propuestas ambiciosas no será más que otra reunión estéril y una pérdida de tiempo. Corresponde a la Unión Europea tener la valentía necesaria para responder positivamente a esta propuesta del presidente Petro y para ello la diplomacia española debe tomar la iniciativa como país que presidirá el Consejo de la Unión en el momento de celebrarse la cumbre.

Este contexto internacional sitúa para el partido los siguientes objetivos de trabajo inmediato: abrir negociaciones de paz en Ucrania en el seno de NNUU, partiendo de los planes de Paz actuales; reforzar un amplio frente lucha por la paz que prepare para el 21 de septiembre una jornada en defensa de la Paz y la Seguridad en todo el mundo; e impulso de la Cumbre de los Pueblos que se celebra en Bruselas en julio próximo. El pasado 5 de mayo se constituyó la plataforma española preparatoria de la Cumbre de los Pueblos, en un encuentro exitoso por su amplia participación y por la ambición mostrada en las propuestas de trabajo. Saludamos el trabajo del área de Relaciones Internacionales de nuestro partido y del área de Relaciones Internacionales y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida por el excelente trabajo preparatorio y por los buenos resultados de este encuentro.

Concluimos este apartado señalando la importancia de las movilizaciones sindicales que están teniendo en Francia para confrontar con una reforma del sistema de pensiones de jubilación absolutamente regresiva para los derechos de los trabajadores.

Finalmente felicitamos al Partido Comunista de Austria por su brillante trabajo político vinculado a la solución de los problemas concretos de la clase trabajadora, lo que ha posibilitado su reciente avance electoral en la región de Salzburgo, con más de un 11% de los votos y un 21,5% en la ciudad capital, la segunda posición. Este importante éxito llega tras la victoria alcanzada en el año 2021 en la ciudad de Graz —la segunda ciudad más grande del país—

donde con un 29% de los votos obtuvo la alcaldía. Este trabajo volcado hacia las necesidades concretas de la clase trabajadora es un ejemplo a seguir para el Partido Comunista de España.

II.- Realizamos esta comisión política en plena precampaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas y tras haber concluido las movilizaciones del Primero de Mayo del año 2023.

Seguimos en un contexto de crisis del modelo económico y energético agudizada por la guerra de Ucrania, a lo que se añaden las tensiones propias del fin de una legislatura sin duda muy positiva para las clases trabajadoras. El capitalismo ha demostrado no solamente su incapacidad para garantizar los derechos de los trabajadores sino también su incompatibilidad con garantizar la vida en el planeta.

Nos enfrentamos también a una grave crisis climática. En estos momentos sufrimos una grave sequía que ya se vaticina que afecte a las cosechas de cereales y a la producción de aceite encareciendo aún más la cesta de la compra. En nuestro país el agua es un bien en disputa. Mientras la ciudadanía sufrimos las consecuencias de esta sequía, grandes empresas energéticas y explotaciones agrícolas no sostenibles derrochan nuestra agua en su beneficio poniendo en riesgo enclaves naturales tan importantes como Doñana.

Además, el incremento de las temperaturas ya es un problema de salud pública constatable frente al cual no estamos tomando ninguna medida. El mes de Abril pasado por primera vez se superaron los 15 grados de media cada día del mes y se prevé un verano muy caluroso. El año pasado fallecieron más de 5.000 personas en las sucesivas olas de calor que sufrimos. Pese a estos graves antecedentes no se han tomado medidas para prevenir las consecuencias de estas olas de calor en la población vulnerable. La creación de refugios climáticos, la adecuación de los hogares a las altas temperaturas mediante políticas de rehabilitación de vivienda para que las casas de la clase trabajadora sean refugios climáticos, y la lucha contra el cambio climático son claves para evitar un grave problema para nuestra clase.

La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España ha supuesto importantes avances en derechos y mejora de las condiciones de vida para las clases trabajadoras, aunque somos conscientes de que aún nos queda mucho por hacer. Ello nos obliga en estos últimos meses a incrementar los esfuerzos para cumplir con los retos que aún quedan pendientes de ejecución conforme a lo establecido en el acuerdo de Gobierno de coalición, así como a desplegar un importante esfuerzo político para obtener buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas y posteriormente revalidar una mayoría de izquierdas que permita frenar la llegada al Gobierno de España de una alianza de la derecha y la ultraderecha.

El Partido Comunista de España ha trabajado para que todo nuestro espacio político apoyara las reivindicaciones e impulsara las movilizaciones de los sindicatos de clase este Primero de Mayo, reivindicaciones que son también las nuestras. Valoramos muy positivamente la realización del acto de debate sobre

los objetivos del Primero de Mayo realizado el 28 de abril con la presencia de las máximas direcciones de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT y con la ministra de trabajo Yolanda Diaz, junto al secretario general de nuestro partido, un acto que ya es habitual en la preparación de las movilizaciones del Primero de Mayo y en el cual nuestro Partido envía a la sociedad un claro mensaje sobre nuestras prioridades reivindicativas para defender los intereses de la clase obrera.

Subir salarios, bajar los precios y repartir los beneficios empresariales es también nuestra agenda política inmediata, en la que hemos venido trabajando durante toda la legislatura. Las subidas del SMI un 47% hasta alcanzar los 1.080€/mes en 14 pagas; la subida de las pensiones un 8,5% y obligación legal de subirlas conforme al IPC el año sucesivos; la subida de 9,5% a funcionarios y empleados públicos a aplicar en 18 meses; o los 20,6 millones de personas trabajadoras activas, la cifra más alta de la historia, ha puesto de manifiesto que los esfuerzos llevados adelante por la fuerzas de izquierdas en el Gobierno de España han sido muy beneficiosos para las clases trabajadoras y los sectores populares más vulnerables, pero no han venido acompañadas hasta ahora por la patronal de acuerdos con los sindicatos para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras y, por tanto, a toda la sociedad.

A pesar de que las empresas están beneficiándose de las políticas económicas de transferencia de recursos económicos desde el Estado que ha puesto en marcha este gobierno, continúan anteponiendo la acumulación irrestricta de beneficios y negándose hasta ahora a subir los salarios de la clase trabajadora en la misma cuantía que el incremento del IPC por la inflación. Las recientes movilizaciones sindicales han conseguido que la patronal acepte una subida del 4% de los salarios para el año 2023 y un 3% en el año 2024 y en el 2025, además de un 1% adicional de incremento para estos dos últimos años en el caso de que la inflación subiera por encima del 3%. Esta propuesta ya ha sido aceptada por las direcciones sindicales y aunque supone un importante avance para cerrar las negociaciones sobre el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) – en negociación desde hace más de un año- no implica que se hayan alcanzado ya la más importante de las reivindicaciones: la garantía de subida de los salarios en una cuantía igual al incremento de la inflación.

Somos conscientes de que con la actual correlación de fuerzas política y capacidad de presión sindical es difícil aprobar una legislación que obligue a la subida de salarios generalizada en el sector empresarial privado. Precisamente por ello es fundamental impulsar la lucha sindical y los distintos conflictos laborales abiertos por las organizaciones sindicales, tanto para mejorar las condiciones de trabajo en general como para incrementar los salarios en particular.

Los beneficios de los grandes oligopolios energéticos y financieros siguen creciendo en España. Según han ido anunciando, las cuatro grandes multinacionales energéticas -Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa-, ganarán 3.500 millones de beneficio neto, después de impuestos, en el primer trimestre del año 2023, un 11% más que hace un año. Así, las energéticas mantendrán la tendencia de 2022, ejercicio en el que registraron de forma generalizada récord

de beneficios en plena crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Esta situación ha posibilitado que se aprobara nuestra propuesta de un impuesto sobre estas ganancias, aunque aún no hemos conseguido que sea permanente sino únicamente temporal, por la oposición del Partido Socialista a consolidarlo como estructural.

Durante este ejercicio 2023, las energéticas tendrán que afrontar el pago del impuesto temporal, lo que permitirá recaudar aproximadamente 1000 millones de euros, cantidad importante pero que a la vez permite a estas empresas mantener altos niveles de beneficios.

Igual ocurre con el nuevo impuesto -también por ahora temporal- que grava a las entidades bancarias que facturaron más de 800 millones en 2019, por ahora circunscrito a la actividad que las entidades desarrollen en España. En el primer trimestre de 2023, BBVA ha obtenido 1.846 millones de euros de beneficio neto y abonará 225 millones de impuesto temporal; Sabadell 205 millones de euros de beneficio y abonará 157 millones de impuesto temporal; Santander 2.571 millones de euros de beneficio y abonará 224 millones de impuesto temporal; Bankinter 185 millones de euros de beneficio y abonará 77 millones de impuesto temporal; y Unicaja 34 millones de beneficio neto y abonará 63,8 millones de impuesto temporal. Sumando a CaixaBank, el impuesto temporal recaudará cerca de otros 1.000 millones de euros que, si no existiese el tributo, sumarían en el beneficio de las entidades financieras.

A pesar de este incremento de recaudación, los beneficios siguen siendo absolutamente exagerados a la vez que se mantiene la resistencia a subir salarios. La propuesta del Partido Comunista de España es continuar trabajando para abordar una profunda reforma fiscal que garantice una redistribución eficaz de los inmensos beneficios empresariales obtenidos como consecuencia de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Una reforma fiscal, que, entre otras medidas fiscales, convierta estos impuestos en permanentes y que apliquen un tipo impositivo equivalente al que pagan las familias trabajadoras por sus ingresos.

Hasta ahora también hemos conseguido aprobar medidas que suponen ingresos indirectos a las clases trabajadoras, ayudas y transferencias que además han servido para controlar la inflación, es decir, para bajar precios: La aprobación del mecanismo ibérico de tope al gas, que rebaja la factura de la luz; el bono social para extender los descuentos en la factura de la luz a familias vulnerables; la intervención estatal en el mercado del alquiler limitando al 2% la revalorización de los alquileres, medida que esperamos se consolide con la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia; el apoyo al transporte público con ampliación del 50% al 100% de los descuentos, con lo que pasan a ser gratuitos los abonos de autobuses en los trayectos con concesión de servicio público; Y la prórroga durante todo 2023 en los trenes de los abonos gratuitos en Cercanías. Son medidas que han contribuido a limitar la subida de los precios y su impacto sobre las condiciones materiales de vida de las familias trabajadoras. España sigue siendo el país europeo con la inflación más baja, con una variación anual del 4,1%, con lo que la tasa anual de la inflación subyacente ha disminuido nueve décimas, hasta el 6,6%. Para nuestro Partido es una gran preocupación en general el incremento de la inflación

porque supone un empeoramiento de la vida de los trabajadores y las trabajadoras y en especial la subida de los precios de los alimentos. No cabe duda de que en esta materia la bajada de impuestos y los protocolos de actuaciones empresariales en absoluto han sido eficaces para bajar precios o controlar su ascensos. Permanentemente nos enfrentamos a una gran resistencia del PSOE para aprobar una normativa de control de precios, sin duda porque esta medida ataca a los intereses de los grandes grupos económicos que manejan la distribución y comercialización de los productos de alimentación en España.

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de las clases trabajadoras y en esta materia hemos encontrado una gran resistencia del Partido Socialista durante toda la legislatura para adoptar medidas que inicien seriamente la solución del problema. Está a punto de aprobarse la primera ley de vivienda de la democracia en la que se ha avanzado garantizándose una planificación para que en veinte años el parque público de vivienda en alquiler en España pase del actual 2% -mientras existen 300.000 viviendas puestas en alquiler turístico- a un 10%. Pero no es una ley que satisfaga todas nuestras reivindicaciones en concreto respecto al control de las viviendas en manos de los grandes tenedores, tanto respecto a la capacidad de ponerlas en el mercado de alquiler de vivienda para evitar la subida de precios, como tampoco respecto al control de los precios de los arrendamientos y de sus posibles subidas. El Partido Socialista finalmente ha aceptado la reivindicación que durante toda la legislatura ha realizado Unidas Podemos para que las viviendas en manos de la SAREB se integren de inmediato a un parque público de alquiler, y a la vez ha entrado en una espiral electoralista en materia de propuestas sobre vivienda, poniendo en evidencia su inacción durante estos años. No hay solución para garantizar el acceso a la vivienda si no es desde un parque público de vivienda en alquiler social. Esta medida es la única que romperá el monopolio que ejercen en el mercado de la vivienda tanto el sector inmobiliario como las entidades bancarias y que debemos colocar en el centro del debate electoral.

En el marco de la campaña electoral, el problema de la vivienda, desde la perspectiva de la realización del derecho a una vida digna y a impedir la mercantilización y el negocio sobre esta necesidad básica, está cobrando un evidente protagonismo. Sin embargo, entendemos que no se pueden dar pasos atrás respecto a lo conseguido. La última propuesta sobre un programa de avales para jóvenes lejos de satisfacer nuestros planteamientos dame incentivar políticas de arrendamiento en lugar de políticas de compra de vivienda, supone una medida estéril que ya ha sido probada en otros países europeos con malos resultados para los trabajadores y para los objetivos de las instituciones públicas. Es una medida que solamente beneficia a personas con altos recursos económicos, quienes están en condiciones de adquirir vivienda en propiedad, y significa dar mayores garantías a los bancos y no a las familias, especialmente si se trata de familias trabajadoras. Una medida que provoca sobreendeudamiento de la juventud e incrementa los beneficios bancarios.

Y es por eso por lo que no podemos aceptar el retroceso que supone la medida anunciada por el Presidente del Gobierno de España de avalar el 20 % del importe de los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda. Conviene

recordar que la vivienda en España se trata como una mercancía que establece su precio en función de la cuantía económica que las entidades financieras están dispuestas a conceder en forma de crédito hipotecario, incluso adulterando las tasaciones y provocando burbujas como la del 2008, con el consiguiente drama para las familias trabajadoras hipotecadas. Por esto, si se sigue la táctica de incrementar mediante avales las cantidades a conceder en préstamos, no solo se estará provocando el sobreendeudamiento de las familias trabajadoras, sino que se estará inflando artificialmente el precio de la vivienda en el mercado. De ahí nuestro rechazo a la medida aprobada por el Consejo de Ministros, que va contra los tímidos avances que se lograron a partir de la aprobación de la Ley del Crédito Inmobiliario de 2019.

De otra parte, vemos con preocupación el texto de la Ley de Vivienda que ha sido remitido al Senado para continuar el trámite para su aprobación. Compartimos las inquietudes manifestados por las organizaciones y colectivos de defensa del derecho a la vivienda, porque entendemos que no se abordan, cuando no se retrocede en cuestiones básicas como son: la protección de los deudores hipotecarios; la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social y se enfrentan a procedimientos de desahucio; la escasa cuantía del tope a los incrementos de las rentas de alquiler; la indefinición de las medidas de conciliación que quedan al albur de las comunidades autónomas... Y la falta de mecanismos concretos de intervención sobre las propiedades inmobiliarias en manos del oligopolio financiero e inmobiliario que deberían de dotar el parque público de vivienda en alquiler.

Para poder avanzar en todos estos objetivos pendientes la izquierda transformadora debe incrementar su capacidad de movilización en las calles y de influencia en las instituciones, para continuar mejorando las condiciones de vida de las clases trabajadoras y reforzar su capacidad de lucha y transformación. Para ello es fundamental la existencia de sindicatos de clase fuertes, marcándonos en este sentido tres objetivos para el Partido Comunista:

1-Continuar trabajando para reforzar los sindicatos de clase, máxime considerando que en España existe una política permanente de ataque a los sindicatos por parte del capital y los medios de comunicación controlados por ellos, así como de las fuerzas políticas de la derecha, que les son funcionales a ambos. En el periodo 2010 a 2018, coincidiendo con un periodo de incremento de las luchas sociales, la afiliación en nuestro país ha crecido hasta un 16% de los trabajadores en activo, superando el 12% de la década de 1980. Ningún país europeo ha crecido tanto en afiliación sindical en las últimas décadas. La realidad nos sitúa en buenas condiciones para continuar trabajando por el fortalecimiento del movimiento sindical en este caso apoyando las movilizaciones sindicales tanto huelgas como manifestaciones u otro tipo de movilizaciones.

2-Debemos trabajar en segundo lugar para que la lucha sindical en España se caracterice por fijar objetivos concretos y alcanzarlos huyendo de estrategias construidas sobre objetivos difusos hoy inalcanzables que nunca pueden dar lugar a presentar victorias ante los trabajadores. El mantenimiento de la unidad de acción de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT desde hace ya cuatro décadas es una poderosa herramienta que permite continuar la lucha sindical

con perspectivas de alcanzar mejoras permanentes en las condiciones de trabajo.

3-Nuestro tercer objetivo debe ser utilizar nuestra presencia en el Gobierno de coalición para contribuir a que las reivindicaciones sindicales se conviertan en leyes y en políticas públicas. Esta estrategia de coordinación de las luchas y el trabajo institucional ha permitido a los sindicatos presionar tanto al Gobierno de coalición como las organizaciones empresariales y conseguir victorias para la clase trabajadora, desde la subida del salario mínimo a la reforma laboral, la mejora de la calidad del empleo mediante la ley de empleo o la Ley Raider o la mejora y fortalecimiento de las pensiones públicas.

La importancia de seguir articulando el trabajo del Partido en torno a estas luchas concretas no se circunscribe únicamente a la consecución de mejoras para la clase trabajadora, sino que además supone evidenciar su carácter de disputa al capital y de elemento potenciador de la conciencia de clase en nuestro país para poder avanzar en un horizonte de transformación socialista. Patronal, banca, oligopolios, Partidos de la derecha, y también la resistencia del PSOE en estas luchas concretas, son el reflejo de la defensa del capital en la lucha de clases de nuestro país, lo que se evidencia en las luchas y conflictos concretos, siendo nuestro trabajo que así sea percibido por el conjunto de nuestra clase.

A la vez el Partido despliega su trabajo político para alcanzar los 3 anteriores, objetivos, continuaremos defendiendo los derechos feministas y estimulando la movilización social para alcanzarlos.

III.- El trabajo inmediato del PCE para la democratización de la economía. Para el PCE hay que seguir avanzando en materia de políticas sociales y laborales en favor de la mayoría trabajadora, máxime en esta situación de desigualdad e injusticia social que es consustancial con el sistema capitalista. Los pasos que hemos ido dando, abandonando las políticas más neoliberales nos sitúan en buenas condiciones para, aprovechando también los cambios tecnológicos, repartir el empleo exigiendo la reducción de jornada laboral sin reducción salarial. Frente a décadas de neoliberalismo y socavamiento de la soberanía política y productiva de nuestro país, creemos imprescindible el desarrollo de un programa de democratización de la economía, que incluya medidas para que el Estado controle los sectores más estratégicos de la economía. Nunca hemos renunciado a la nacionalización de la banca o del sistema energético y por ello reclamamos pasos firmes para poner en marcha una banca pública y un sector energético público, además de la extensión de un sector público productivo e industrial que dará más poder de decisión a la clase trabajadora. Solamente están medidas de democratización efectiva de la economía nos permitirán avanzar hacia el socialismo.

La democratización de la economía en nuestro país requiere también de la transformación política del Estado en un sentido republicano. La soberanía y democracia real son imprescindibles para una democratización económica que obviamente es combatida con firmeza por los representantes del capital. Por ello, nuestra propuesta por la III República Federal ha de seguir siendo un eje

transversal de la acción de las y los comunistas, así como una seña de identidad de todas las organizaciones del Partido, que atraviere todo el territorio sobre la base de la realidad de un país plurinacional como el nuestro.

IV.- El periodo electoral: elecciones municipales y autonómicas como primer reto hasta las elecciones generales. Una vez cerrado en los periodos de presentación de coaliciones y candidaturas podemos felicitarnos de haber registrado más de 1.000 coaliciones electorales en su mayoría compuestas por Izquierda Unida y Podemos pero en muchos casos, y en especial en ciudades importantes, también conformadas por otras fuerzas políticas como Alianza Verde, Equo o Más País, todas ellas comprometidas a fecha de hoy a fortalecer la convergencia electoral para las próximas elecciones generales en torno al proyecto de Sumar.

Nuestro Partido reitera su vocación unitaria, de construcción de frentes amplios de izquierda y de unidad popular, imprescindible para poder continuar gobernando con un programa de radicalidad democrática a la vez que evitamos un Gobierno de la derecha y la extrema derecha. Reiteramos nuestros permanentes llamamientos a la unidad de la izquierda en la perspectiva de ampliación del actual espacio político y construcción de una más amplia alianza en torno al proyecto de SUMAR.

El PCE e Izquierda Unida descansan en gran medida sobre el trabajo municipal pegado a la realidad de los territorios y a los problemas de la gente. Para nosotras y nosotros es estratégico obtener buenos resultados electorales y mantener nuestra representación en concejales y alcaldías, y a ser posible avanzar y mejorar nuestra presencia municipal: Máxime teniendo en cuenta que una de nuestras grandes fortalezas, en comparación con el resto de fuerzas de izquierda de este país, es la amplia extensión e implantación territorial del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Por eso todas las organizaciones del Partido Comunista de España y de la Juventud Comunista deben volcarse en el desarrollo de la campaña electoral y el apoyo de las candidaturas de Izquierda Unida o de las distintas coaliciones municipalistas en las que se inserte nuestro Partido. Esa es nuestra obligación principal desde hoy mismo hasta el próximo 28 de mayo.

No perdemos de vista que de forma inminente debemos continuar el proceso de diálogo con la dirección de la Unión de Juventudes Comunistas de España para resolver todos los problemas derivados de la falta de aplicación por esta organización de las políticas acordadas en los distintos Congresos del Partido y de forma urgente con la perspectiva de corregir de inmediato la posición manifestada por la UJCE de no dar apoyo al Partido ni a Izquierda Unida en los procesos electorales en marcha de las elecciones municipales y autonómicas.

Desde hace 6 meses la dirección del Partido está comprometida y trabajando con la dirección de la UJCE para corregir esta situación de falta de cumplimiento de la política estratégica electoral del PCE, por lo que reiteramos la necesidad de que estos desajustes de gran trascendencia política se corrijan de inmediato y antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.

Como siempre ha ocurrido a lo largo de la vida política de nuestro Partido, los procesos electorales en los que concurrimos directamente como Izquierda Unida o a través de otras candidaturas, no solamente son procesos para conseguir presencia institucional y parcelas de poder municipal o autonómico en este caso, sino que también son una oportunidad de extender la organización y nuestras propuestas políticas. Hoy más si cabe lo son en la perspectiva de ampliación del proceso electoral en el que ya estamos todas y todos implicados, cara a las próximas elecciones generales.

La campaña electoral también debe ser utilizada como un momento favorable para extender nuestra organización partidaria, la organización de Izquierda Unida y también para difundir y organizar el proyecto de Sumar, en especial aprovechando la presencia de Yolanda Díaz en multitud de actos electorales en todo el territorio durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Debemos esforzarnos por vincular la campaña electoral con la explicación de la propuesta política para un nuevo país elaborado por los grupos de trabajo y elaboración política de Sumar y que acaba de ser presentado en público. El Partido Comunista de España debe organizar su trabajo de impulso del proyecto de sumar para lo que nos comprometemos a articular un grupo de trabajo específico en el que se integren las distintas áreas de responsabilidad y que permitan preparar aportaciones de forma colectiva a este proyecto. El PCE debe contribuir a que cualquier programa de país -y en su caso los sucesivos programas electorales- tengan un claro contenido transformador, para lo que es imprescindible establecer un mecanismo que permita que el Partido elabore, aporte, discuta las distintas opciones sobre la mesa y facilite la capacidad de síntesis.

Tanto una como otra actividad -el desarrollo de la campaña electoral y la elaboración y explicación de la propuesta política para un nuevo país- deben también permitirnos vincular colectivos sociales, políticos y sindicales organizados a este proceso, así como vincular a personas individuales que no han tenido vinculación previa con Unidas Podemos o con Izquierda Unida y que poco a poco deben ir siendo organizadas en el proceso participativo que debe acompañar a la conformación de las candidaturas de Sumar. Nuestra prioridad es contribuir a poner en marcha procedimientos y métodos que permitan el impulso del proceso de Sumar de la forma más integradora y participativa posible.

Madrid, 9 de mayo de 2023